

Proyecto de Ley N° 5028/2022-CR



LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Congresista de la República

"Año de la Universalización de la Salud"



LEY ORGANICA QUE DESARROLLA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 137° DE LA CONSTITUCIÓN



FÓRMULA LEGAL

LEY N° 5838/2020-CR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la siguiente Ley de Reforma Constitucional:

**PROYECTO DE LEY QUE DESARROLLA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 137° DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto desarrollar el artículo 137° de la Constitución Política del Perú, respecto de los Estados de Excepción: Emergencia y/o Sitio.

Artículo 2. Disposiciones Generales

- 2.1. Los Estados de Emergencia y/o de Sitio procederán cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad.
- 2.2. La adopción de medidas en los Estados de Excepción: Emergencia y/o Sitio, así como la duración de los mismos, serán aquellas estrictamente indispensables para resguardar el gradual restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se efectuará gradual y proporcionalmente a las circunstancias de cada caso concreto.
- 2.3. La declaración de los Estados de Emergencia y/o Sitio no impide el funcionamiento habitual de los poderes constitucionales del Estado.

Artículo 3. Publicación en el Diario Oficial

La declaración de los Estados de Excepción: Emergencia y/o Sitio será publicada en el diario oficial "El Peruano", y será difundida necesariamente en todos los medios de comunicación públicos y privados que se establezcan, y entrará en vigencia desde su publicación. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que la autoridad competente establezca durante la vigencia de cada uno de los estados de excepción.

Artículo 4. Actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública

- 4.1. Los actos y disposiciones de las entidades públicas adoptados durante la vigencia de los Estados de Excepción: Emergencia y/o Sitio serán impugnables de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y los cuerpos normativos correspondientes. Se suspenden los plazos administrativos, hasta que se supere el Estado de Excepción.
- 4.2. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados de excepción sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado.

CAPÍTULO II

El Estado de Emergencia

Artículo 5. Estado de Emergencia

El Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que le otorga el artículo 137° de la Constitución, podrá declarar el Estado de Emergencia, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones graves de la normalidad:

- a) En caso de perturbación de la paz o del orden interno
- b) En caso de catástrofe
- c) En caso de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

Artículo 6. Sobre la declaración del Estado de Emergencia

- 6.1. El Poder Ejecutivo, una vez corroborado la configuración de alguna de las alteraciones establecidas en el artículo 5, procederá a declarar el Estado de Emergencia, acordando para ello su establecimiento mediante un Decreto Supremo.
- 6.2. En el Decreto Supremo se determinará el ámbito geográfico, la duración y los efectos del Estado de Emergencia, que no podrá exceder de sesenta (60) días.
- 6.3. Si se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la declaración del Estado de Emergencia, el Poder Ejecutivo declarará su prórroga, la que no podrá superar de treinta (30) días, bajo el mismo alcance y bajo las condiciones vigentes.

Artículo 7. Autoridad Competente

Para todos los efectos del Estado de Emergencia, la Autoridad competente estará comprendida por el Poder Ejecutivo.

Artículo 8. Policía y Ejército

- 8.1. Por la declaración del Estado de Emergencia, los integrantes de la Policía y del Ejército, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Poder Ejecutivo, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
- 8.2. Las fuerzas del orden podrán detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan sospechas razonables de que dicha persona vaya a incitar alteraciones del orden público.
- 8.3. La detención habrá de ser comunicada al juez competente en el plazo de veinticuatro (24) horas. Durante la detención, el juez podrá, en todo momento, requerir información y conocer personalmente el caso, o mediante delegación en el juez competente.

Artículo 9. Incumplimiento de la Declaratoria de Emergencia

- 9.1. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el Estado de Emergencia, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las normas pertinentes y complementarias.
- 9.2. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios públicos, las autoridades responsables podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, remitiendo los actuados al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario.
- 9.3. Si fuesen cometidos por autoridades del Poder Ejecutivo, las facultades de éstas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas, en ejecución de la declaración del Estado de Emergencia, podrán ser asumidas por otras autoridades competentes del Poder Ejecutivo durante su vigencia.

Artículo 10. Medidas durante el Estado de Emergencia

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

- a) Restringir la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
- b) Practicar inspecciones temporales de todo tipo de bienes.
- c) Intervenir y ocupar de forma transitoria industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios correspondientes.
- d) Restringir o limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
- e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados.
- f) Intervenir y fiscalizar toda clase de transportes, y la carga de los mismos.

g) Cuando la autorización comprenda la restricción de las libertades comunicativas, las fuerzas del orden podrán intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Dicha intrusión solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público.

Artículo 11. Medidas adicionales

11.1. Las autoridades competentes podrán adoptar, según los casos, además de las medidas mencionadas en los artículos anteriores, aquellas determinadas en la legislación vigente referida a la lucha contra las enfermedades infecciosas y la protección del medio ambiente.

11.2. En los casos previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 5, el Poder Ejecutivo podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento.

Artículo 12. Sobre la restricción a la libertad de reunión

12.1. Cuando la autorización del Poder Ejecutivo comprenda la restricción del derecho a la libertad de reunión, las fuerzas del orden podrán someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. También podrá disolver las reuniones y manifestaciones a que se refiere el párrafo anterior.

12.2. Para penetrar en los locales en que tuvieran lugar las reuniones, las fuerzas del orden deberán proveer a sus agentes de autorización formal y escrita. Esta autorización no será necesaria cuando desde dichos locales se estuviesen produciendo alteraciones graves del orden público constitutivas de delito o agresiones a las fuerzas de seguridad y en cualesquiera otros casos de flagrante delito.

Artículo 13. Sobre restricciones a portar armas

Las fuerzas del orden tienen la potestad de incautar toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas.

Artículo 14. Sobre intervenciones de industrias o comercios

Las fuerzas del orden podrán ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la restricción temporal de las actividades de los mismos, dando cuenta a los Ministerios correspondientes. Asimismo, podrán ordenar el cierre temporal de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales de similares características.

Artículo 15. Sobre medidas de vigilancia y protección

Las fuerzas del orden podrán ordenar medidas de vigilancia y protección de las edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias y/o explotaciones de cualquier género.

Artículo 16. Sobre suspensiones en el ejercicio del cargo

Si algún funcionario o personal al servicio de una entidad del Poder Ejecutivo favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden, las fuerzas del orden podrán suspenderlo en el ejercicio de su cargo, notificando al superior jerárquico a para la apertura del expediente disciplinario y con la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 17. Detención

Si durante el Estado de Emergencia las fuerzas del orden estimaran la existencia de hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser constitutivos de delito, se detendrá a los implicados y se les pondrá bajo el resguardo de las autoridades competentes.

Artículo 18. Coordinación con Gobiernos regionales y locales

Cuando la declaración del Estado de Emergencia afecte exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de la Nación, el Poder Ejecutivo coordinará con los Gobiernos Regionales y Locales que se vean afectados por la declaratoria.

CAPÍTULO III

Estado de Sitio

Artículo 19. Estado de Sitio

- 19.1. Cuando se produzca o exista una amenaza de insurrección o acto de fuerza, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente contra la soberanía o independencia de la República del Perú, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, declarará el Estado de Sitio.
- 19.2. El correspondiente Decreto Supremo determinará el ámbito territorial, la duración y las condiciones del Estado de Sitio.
- 19.3. La declaración podrá autorizar, además de lo previsto para los estados de emergencia, la restricción temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en la Constitución Política del Perú.

Artículo 20. Sobre la Declaración del estado de Sitio

- 20.1. En virtud de la declaración de Estado de Sitio, el Presidente de la República, en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley.
- 20.2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo designará a la Autoridad militar que, bajo su dirección, ejecutará las medidas que se requieran en el territorio a que el Estado de Sitio refiera.

Artículo 21. Alcances y procedimientos

La Autoridad militar procederá a publicar y difundir los alcances y procedimientos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución, la presente ley y las condiciones de la declaración del Estado de Sitio.

Artículo 22. Determinación de delitos

En la declaración del Estado de Sitio, el Poder Ejecutivo podrá determinar los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la jurisdicción militar.

Artículo 23. Sobre las Autoridades civiles

Las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no le hayan sido conferidas a la Autoridad militar de acuerdo con la presente Ley. Aquellas autoridades darán a la autoridad militar la información que ésta le solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA Y ÚNICA: VIGENCIA

La presente norma y sus disposiciones entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano", el requerimiento de normas reglamentarias no impedirá la aplicación inmediata de las disposiciones señaladas en la presente Ley.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de julio de dos mil veinte.



Firmado digitalmente por:
PEREZ OCHOA Carlos Andres
FIR 15742574 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2020 13:36:18-0500



Firmado digitalmente por:
SALINAS LOPEZ Franco FAU
20161740126 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2020 13:21:24-0500



Firmado digitalmente por:
BURGA CHUQUIPIONDO
Ricardo Miguel FAU 20161740126
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2020 16:41:25-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR ZAMORA Manuel FAU
20161740126 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/07/2020 19:40:13-0500



Firmado digitalmente por:
SAAVEDRA OCHARAN Monica
Elizabeth FAU 20161740126 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/07/2020 16:52:35-0500



Firmado digitalmente por:
ROEL ALVA LUIS ANDRES FIR
42725375 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 21/07/2020 16:07:40-0500



Firmado digitalmente por:
GARCIA OVIEDO Paul
Gabriel FAU 20161740126 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/07/2020 17:22:44-0500

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

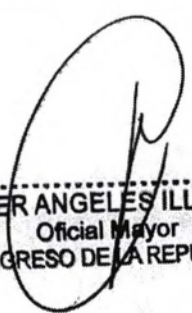
Lima, 27 de Julio del 2020...

Según la consulta realizada, de conformidad con el
Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la
República: pase la Proposición N° 5038 para su
estudio y dictamen, a la(s) Comisión(es) de
CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

.....

.....

.....



JAVIER ANGELES ILLMANN
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **17** de **mayo** del **2023**

De conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión realizada el 2 de mayo de 2023, actualícese el proyecto de ley N° 5838/2020-CR **asignándole el N° 5028/2022-CR.**

.....
JAVIER ÁNGELES ILLMANN
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPUBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA

Introducción¹

Como es de público conocimiento, la pandemia mundial del COVID-19 ha llevado a los gobiernos mundiales a decretar estados de emergencia, es decir regímenes especiales en donde pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito.

El Perú no fue ajeno a esta realidad, por lo que mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 16 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, una de las dos formas de régimen de excepción contempladas en la Constitución Política del Perú. En este orden de ideas:

*"Tal como sucede en otros países, en el Perú la Constitución ha reconocido la presencia de los denominados estados de excepción. Estos son declarados ante situaciones de especial apremio que ponen en peligro el cumplimiento del orden legal establecido o la existencia del propio Estado. Para ello, el Poder Ejecutivo – sobre la zona en la que se presenta la situación irregular– declara el estado de excepción con el posterior recorte o limitación de algunos derechos fundamentales"*².

Cabe señalar que los estados de excepción se encuentran regulados en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, sin embargo, no cuenta con un desarrollo legislativo que evite posibles excesos por parte del Ejecutivo. Frente a ello:

"Como quiera que fuere, parece conveniente recordar que el Tribunal Constitucional peruano ha señalado, en la primera sentencia que emitió en

¹ Algunas de estas ideas y nociones fueron elaboradas e investigadas conjuntamente con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, cuando trabajamos juntos en el Instituto de Defensa Legal (IDL).

² RODRIGUEZ CAMPOS, Rafael. 2012. Los estados de excepción en la Constitución de 1993 - Una aproximación doctrinaria y jurisprudencial. Gaceta Constitucional N° 55. Pp. 34-47

*la materia, con ocasión del proceso de inconstitucionalidad instaurado por la Defensoría del Pueblo contra la ley N° 24.150, regulatoria de la participación de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción cuando asumen el control del orden interno, que una de las características que distinguen al régimen excepcional es la existencia de controles tanto de orden jurisdiccional como de naturaleza política en sede parlamentaria, "para que se cumplan los principios de rendición de cuentas y de responsabilidad política". Este criterio ha sido luego confirmado por el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia expedida en la causa ventilada sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1095, relativo a las reglas de uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en el territorio nacional"*³.

De acuerdo a lo expuesto, nuestra Constitución Política no requiere una autorización previa del Congreso de la República para que el Presidente de la República declare un estado de excepción, sino que prescribe el control posterior ("dando cuenta"), por lo cual es necesario regular los supuestos que justifican la declaratoria del estado de emergencia o estado de sitio, establecidos en nuestra Constitución y desarrollados por el Tribunal Constitucional.

Cabe señalar, que diversos países han desarrollado los estados de excepción mediante Leyes Orgánicas con muy buenos resultados. Por ejemplo, España, mediante Ley Orgánica 4/1981, ha desarrollado los estados de excepción, alarma y sitio de forma clara y precisa, enmarcando las obligaciones del Estado y los derechos afectados de los ciudadanos durante este tipo de situaciones. Al igual que España, Ecuador ha desarrollado estos regímenes especiales mediante la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en esta norma se desarrollan los requisitos para decretar el estado de excepción, se desarrollan los derechos afectados en cada uno de los regímenes de excepción, incluso la norma desarrolla hasta las comunicaciones que como estado realizan a organismos nacionales e internacionales durante estos periodos de excepción.

Debido a los buenos resultados en estos países de habla hispana, y en otros de lenguas extranjeras, es que consideramos necesario desarrollar el presente Proyecto de Ley, a fin de desarrollar con claridad los estados de excepción señalados en la Constitución Política

³ SILES, Abraham. "Problemática constitucional del estado de emergencia en Perú: algunas cuestiones Fundamentales". En: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002017000200123

del Perú. El presente Proyecto de Ley busca delimitar las competencias del Ejecutivo, establecer reglas claras para el normal desarrollo de los procesos judiciales, así como enmarcar las funciones y atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, entre otros.

Problema constitucional

El análisis legal de la situación de los Estados de Excepción nos ha permitido encontrar una problema constitucional, que requiere el desarrollo del artículo 137º de la Constitución Política del Perú, y la solución es el desarrollo de un Proyecto de Ley que pueda llenar el vacío normativo que existe actualmente sobre estos regímenes de excepción que se encuentran regulados en el artículo 137º de la Constitución, y que comprenden dos situaciones: (i) el estado de emergencia (artículo 137º, inciso 1); y (ii) el estado de sitio (artículo 137º, inciso 2). Ambas situaciones de excepción generan dificultades al momento de instaurarse, permitiendo que el Presidente de la República tenga una libertad de acción no regulada.

La inexistencia de una legislación, genera que se interprete erróneamente el artículo 137º de la Constitución. Por ejemplo, cuando se emitió el Decreto Legislativo N° 1095 en setiembre del 2010, se establecieron reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. En este caso, se invocó la participación de las Fuerzas Armadas en un escenario en el cual declaró el Estado de Emergencia. No obstante, dada la ambigüedad e inexactitud de los alcances de esta norma relativa al uso de la fuerza por parte de los efectivos militares, puede dar lugar a que se generen abusos o situaciones de violencia que pueden ir en detrimento de los derechos fundamentales.

Ante esta difícil situación de determinación de los estados de excepción, el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia N° 00017-2003-AI/TC que:

"(...) dado que los supuestos fácticos que ameritan que se declare la vigencia de un estado de sitio son distintos y más graves que los que corresponden a un estado de emergencia, es constitucionalmente lícito que el legislador establezca una diferenciación en el diseño de las competencias

*que se puedan otorgar a las Fuerzas Armadas, para repelerlos y contrarrestarlos*⁴.

Por las razones aquí expuestas, consideramos necesario desarrollar el artículo 137 de la Constitución Política del Perú mediante un Proyecto de Ley, a fin de realizar una diferenciación entre los estados de excepción vigentes. Asimismo, el desarrollo legislativo resulta necesario para dejar en claro cuáles son las obligaciones de nuestras Autoridades, así como los derechos de los ciudadanos que se puedan ver afectados en estos regímenes de excepción, por tal motivo es necesario contar con una ley de desarrollo constitucional.

Propuesta Legislativa

El presente Proyecto de Ley desarrolla el artículo 137° de la Constitución, en aras de precisar las alteraciones competenciales que su aplicación conlleva, a fin de alcanzar una mejor protección de los derechos constitucionales de aquellas personas que se vean inmersas en estas situaciones excepcionales. Coincidimos con la opinión del Tribunal Constitucional que, de forma expresa, ha considerado la inexistencia del desarrollo constitucional de la disposición en comentario como un problema políticamente relevante. Al respecto, apuntó lo siguiente: se "(...) *constata que hasta la fecha no existe un marco normativo en el cual se desarrolla los regímenes de excepción contemplados en el artículo 137° de la Constitución y el artículo 27° de la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente la regulación de los estados de emergencia*"⁵.

El presente Proyecto de Ley ha desarrollado los siguientes elementos:

- a) un desarrollo de los conceptos de perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación para establecer los casos y situaciones que ameritan la declaratoria del estado de emergencia;
- b) el plazo de sesenta (60) días establecido en el artículo 137° de la Constitución y la naturaleza excepcional de esta medida;
- c) los alcances y características de las limitaciones de los derechos fundamentales establecidos en el inciso 1) del artículo 137°, tomando como base la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo dispuesto en el artículo 200° de la Constitución.

⁴ STC. N° 0017-2003-AI/TC, f. j. 105

⁵ STC. N° 0002-2008-PI/TC, f. j. 31

- d) el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional y político (como la dación de cuentas al Congreso) así como las medidas para establecer veedurías y misiones de observación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados sobre la materia.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha indicado que *"(...) el artículo 137° de la Constitución procura que la declaratoria del estado de excepción tenga, a pesar de ser también discrecional, una valoración más apegada a los hechos y a la gravedad del caso correspondiente, de tal manera que se declara, pero no se crea artificialmente un estado de excepción. Como bien ha definido este Tribunal Constitucional, la excepción hace referencia a una situación de crisis que pone en riesgo el normal funcionamiento del poder público y que amenazan la continuidad de las instituciones estatales"*⁶.

Finalmente, queremos señalar que el desarrollo del artículo 137° de la Constitución en este Proyecto de Ley es una necesidad para el buen funcionamiento del Estado en estos periodos de excepción. Nuestra intención radica en delimitar las competencias del Ejecutivo, delimitar los derechos fundamentales afectados de los ciudadanos durante este tipo de situaciones excepcionales, enmarcar las funciones y atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, entre otros.

Agradecemos a los abogados Juan Carlo Vives Andrade, Juan Carlos Ruiz Molleda, Luis Zavaleta Revilla y Rafael Rodríguez Cuadros, quienes con su experiencia, aportes y debate me han apoyado en la elaboración del presente Proyecto de Ley.

II. EFECTO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad el desarrollo del artículo 137 de la Constitución respecto de los estados de excepción, orientada a delimitar las competencias de las autoridades, identificar los derechos afectados de los ciudadanos, enmarcar las atribuciones de las fuerzas del orden, etc. Todo en función de un mejor desarrollo y aplicación de la Constitución Política del Perú.

⁶STC. N° 0017-2003-AI/TC, f. j. 15 y STC. N° 0002-2008-PI/TC, f. j. 42

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

De aprobarse la iniciativa legislativa, esta no supondrá gastos para el erario nacional, dado que los órganos a cargos de su implementación ya se encuentran integrados por funcionarios públicos cuyos equipos de trabajo ya se encuentran incluidos dentro del presupuestos de cada entidad pública.

IV. RELACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

La iniciativa legislativa propuesta tiene relación directa con la siguiente Política de Estado y Agenda Legislativa del Acuerdo Nacional:

- I. Democracia y Estado de Derecho:
 - 1. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.

- IV. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado:
 - 24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
 - 25. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia.

15/JUN/2022



GRUPO PARLAMENTARIO
ACCIÓN POPULAR

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima, 15 de Junio del 2022

OFICIO N° 165-2022/GP-AP-CR.

SEÑOR:

HUGO ROVIRA ZAGAL

OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU

Presente.-

ASUNTO: desarchivamiento y actualización del proyecto Ley 5838/2020-CR.

De mi mayor consideración

Por la presente le hago llegar a usted mi cordial saludo como vocero de la Bancada de Acción Popular, y a la vez aprovecho la ocasión para solicitarle que se autorice en la próxima sesión del consejo directivo del congreso, el desarchivamiento y actualización del proyecto Ley N° 5838/2020-CR, que tiene por objeto desarrollar los alcances del artículo 137° de la constitución política del Perú.

Es importante mencionar que se adjunta la copia del oficio N° 1003-2021-2022-LAC-CR, donde el congresista LUIS ANGEL ARAGON CARREÑO, solicita esta actualización y desarchivamiento de este importante proyecto descrito en el párrafo anterior, en ese sentido se cumple con anexar los requisitos básicos para lograr esta solicitud establecidas en el acuerdo de consejo Directivo 019-2021.

Esperamos que la presente sea tomada en cuenta, sin otro particular me despido de usted reiterando mi estima personal.

Atentamente.

Luis Angel Aragon
Luis Angel Aragon



ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA
VOCERO PARLAMENTARIO TITULAR
BANCADA ACCIÓN POPULAR

Morley Portero
Morley Portero

Korol Paredes
Korol Paredes

Elvis Vergara
Elvis Vergara

Wilson Soto Palacios
Wilson Soto Palacios

Juan C. Mori
Juan C. Mori Celis

**CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Lima, 2 de mayo de 2023.

Con acuerdo del Consejo Directivo,
Se actualizó el Proyecto de Ley 5838/2020-GR



.....
HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 3 de mayo de 2023

Oficio 130-2022-2023-ADP-CD/CR

Señor congresista

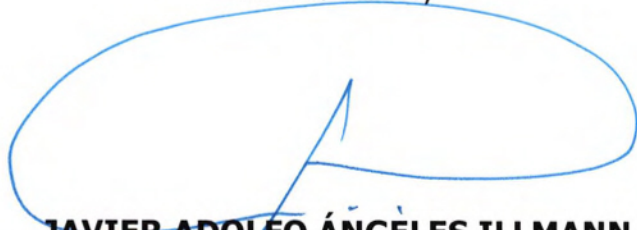
JOSÉ ALBERTO ARRIOLA TUEROS

Portavoz del Grupo Parlamentario Acción Popular

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del señor Presidente del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el Consejo Directivo del Congreso, en su sesión realizada el 2 de mayo de 2023 y con la dispensa del trámite de sanción del acta, acordó actualizar el Proyecto de Ley 5838/2020-CR, por el que se propone desarrollar los alcances del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en atención a la petición formulada con el Oficio 165-2022/GP-AP-CR.

Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi especial consideración.

Atentamente,



JAVIER ADOLFO ÁNGELES ILLMANN
Oficial Mayor del Congreso de la República

c.c. Área de Trámite y Digitalización de Documentos
JVCH/cvd.

1137884

Registro Único : 1137884

Tipo Documento : OFICIO

Nro. Documento : 130-2022-2023-ADP-CD/CR

FECHA	USUARIO	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	ESTADO
09-05-2023 11.57.18	MARIA ELENA SANDOVAL JURUPE - AREA DE	DIRIGIÓ EL DOCUMENTO A JOSE ALBERTO ARRIOLA TUEROS - GRUPO		ENVIADO
09-05-2023 11.57.17	MARIA ELENA SANDOVAL JURUPE - AREA DE	COPIÓ EL DOCUMENTO A JULIAN SAUL RAMOS PAULETT - AREA DE TRAMITE Y		ENVIADO
08-05-2023 16.44.18	MARIA ELENA SANDOVAL JURUPE - AREA DE	RECIBÍ CONFORME EL DOCUMENTO	RECIBÍ CONFORME DOCUMENTO	PENDIENTE
08-05-2023 16.44.16	MARIA ELENA SANDOVAL JURUPE - AREA DE	CREÓ EL DOCUMENTO	CREACIÓN CORRECTA	EN PROYECTO